Desinformación en la política municipal

Juan Martínez García
Responsable de Comunicación de FEGAMP
(Federación Galega de Municipios e Provincias)

Referencia de este artículo

Martínez García, Juan (2025). Desinformación en la política municipal. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, n°30. Castellón de la Plana: Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Comunicación, 347-350.

La desinformación también está presente en la comunicación local siendo necesario contextualizar su análisis y relativizar su impacto.

Es un fenómeno preocupante, por lo que tiene el municipio de escuela de democracia y de ámbito de transformaciones directas, donde el vecino, individual o colectivo, toca la puerta de la administración más próxima que es el ayuntamiento, como decía Alexis de Toqueville: «el municipio es a la libertad lo que la escuela primaria es a la ciencia», destacando la importancia del trabajo en lo local y de la institucionalidad municipal para sentar las bases de democracias sólidas.

En los procesos políticos y sociales que se desarrollan en este ámbito, promovidos por las propias administraciones locales o por la ciudadanía organizada hay mucha inteligencia colectiva que tiene que abrir paso al empoderamiento y a la

participación de grupos más amplios de la sociedad, como uno de los desafíos más importantes que deben proponerse los municipios. Dicha tarea necesariamente está conectada con todo lo relacionado con la comunicación y la labor institucional de comunicar.

La UNESCO marca tres objetivos a cumplir desde la comunicación institucional de gobiernos y administraciones, también las locales, como son aumentar la participación, facilitar la transparencia y fortalecer la democracia.

Por eso, para que la comunicación local y la que emana de los gobiernos municipales pueda ser parte del cambio frente al actual escenario de desinformación y manipulación, tiene la oportunidad de oír y de recoger lo que la gente dice, no solo para que los municipios den respuesta, sino también para que las autoridades locales cumplan el rol representativo de subir esa información local a esferas gubernamentales más centralizadas y por tanto más distantes de la cotidianidad de la gente.

La desinformación en la esfera de lo local también tiene que contextualizarse con una situación generalizada de escasez de recursos y estructura para la comunicación desde las administraciones locales, ya que la inmensa mayoría de los ayuntamientos en España no superan los 10.000 habitantes (en Galicia, sólo 56 de los 313 concellos los superan). También es cierto que el problema en esos espacios no es tanto de manipulación como de desinformación, motivada por la incapacidad real de los ayuntamientos de crear y mantener espacios de comunicación permanente tanto para la transmisión de información a los de medios de comunicación como para dirigirla a la ciudadanía, especialmente a través de las nuevas tecnologías.

Ayuntamientos más grandes y, sobre todo las ciudades, si pueden desarrollar esta labor, cada vez más profesionalizada y orientada a su plena integración en los canales comunicativos creados con las redes sociales, ya imprescindibles para la relación con la ciudadanía y también con los medios.

Con todo, salvo excepciones, no aparecen situaciones de desinformación por manipulación procedentes de los ayuntamientos, ni mucho menos nada que pueda catalogarse como *fake news*. Si bien, no se puede decir lo mismo de los flujos de comunicación procedentes de las administraciones autonómicas y estatal con relación a los ayuntamientos, sin llegar tampoco a las *fake news*, por más que sí haya casos de manipulación informativa relacionados con procesos y conflictos políticos relacionados con los ayuntamientos.

Así pasó con la situación creada en Ferrol hace diez años por la sequía y el incremento de los niveles de trihalometanos del agua de consumo público, que sólo afectó a la calidad y nunca a la salubridad, y como desde el gobierno de la Xunta de Galicia empleo esta situación en contra del gobierno local de Ferrol.

También pasó el verano de 2024 con las subidas del canon de SOGAMA a los concellos gallegos por la gestión de los residuos, siendo una empresa en la que la Xunta de Galicia es el socio mayoritario. La excusa para la subida señalando los impuestos creados por la transposición de la normativa comunitaria, impuestos que en Galicia la Xunta tiene delegada la recaudación y gestión, fue otro ejemplo.

Y, por último, destaca la situación actual del Servicio de Ayuda en el Hogar, cuya financiación depende del Ministerio de Derechos Sociales y de la Xunta de Galicia y que sólo aportan 12 euros por hora de servicio, mientras el coste supera ampliamente de media los 20 euros, y con muchos casos ya de ayuntamientos que están pagando 25 euros por hora de servicio. El ministro rehúsa reunirse con la FEGAMP, que representa a todos los concellos gallegos, aunque públicamente se excusa en que antes se tiene que reunir primero con la Xunta, después de casi año y medio de tener solicitada la reunión para resolver esta situación, que con la Xunta ya se está gestionando desde FEGAMP.